

Plaza Pública para la edición del 6 de octubre de 1996
Votos o balas
por miguel ángel granados chapa.

En Guerrero y en Chiapas (y en la ciudad de México) se ventilan hoy dos asuntos cuyo curso marcará el rumbo futuro de nuestro país. En las elecciones guerrerenses ~~se~~ ^{de} ~~realizan~~ este domingo el miedo inducido puede provocar un fuerte abstencionismo y, por lo tanto, la prologación por inercia de condiciones sociales y políticas de grave deterioro. Por su parte, la comisión legislativa que hoy tiene en sus manos la paz en Chiapas, acaso construya un acuerdo político que asegure la presencia zapatista en el Congreso Nacional Indígena del próximo martes.

Desde que era una entidad predominantemente priísta, Guerrero conoció la violencia electoral, pues diversas banderías se amparaban bajo el emblema del PRI, y caciques regionales usaban sus siglas para proteger intereses. Así, no fue extraño que en esa entidad el cardenismo debutara en 1988 con un conflicto suscitado por la negativa gubernamental de reconocer triunfos a los candidatos del Frente Democrático Nacional. Esa negativa, más violenta aún se prolongó en los años siguientes, como fruto del autoritarismo violento y arbitrario con que el gobernador José Francisco Ruiz Massieu encaró las contiendas electorales en la entidad que regía. Quizá el recuerdo fresco de esa actitud es una de las causas de que en los aniversarios de su asesinato se guarde piadoso silencio

sobre su asesinato.

Esa violencia no ha desaparecido del proceso electoral aunque disminuyó notoriamente, sin duda porque el gobernador Rubén Figueroa tuvo que marcharse a atender sus negocios, en lo que para él fue una salida conveniente y módica frente a la responsabilidad política que le tocó por el asesinato colectivo de Aguas Blancas. No ha dejado de haber balazos, y varias personas muertas, pertenecientes a los tres partidos mayores, son el saldo sangriento de un proceso que debería facilitar la concordia y no lo contrario. Sin embargo, y aunque el dolor ha afectado también a miembros del PRI y del PAN, la cuota mayor sigue siendo la del Partido de la Revolución Democrática, contra cuyos fieles se lanza también persecución con apariencia judicial.

La suerte de ese partido en Guerrero ha estado marcada más por su capacidad para defenderse de las agresiones, que por su aptitud para movilizar grupos crecientes en favor de sus tesis y sus candidatos. En su primera aparición en las urnas, en 1989, ganó doce ayuntamientos, pero luego de una tensa y ardua lucha sólo obtuvo el reconocimiento en nueve. Se redujeron a seis en la elección de 1993, pero su votación entró entonces en un periodo de ascenso (si bien el periodo es todavía muy corto para establecer una tendencia clara). En efecto, se reconocieron al senador Félix Salgado Macedonio 98 mil votos en la elección para gobernador, en febrero de 1993 y ocho meses después, en los comicios para renovar ayuntamientos, el PRD mostró un avance de cincuenta por ciento, al sumar 143,311 votos, cifra que casi

se duplicó en la jornada electoral federal de 1994, cuando llegó a unos 270 mil sufragios.

La elección más parecida a la de hoy, la de hace tres años, ofrece antecedentes que permiten comprender lo que está en juego en esta oportunidad. El PRI sumó entonces 281,810 votos, más del doble de los reconocidos al PRD: la diferencia es tan ancha que sólo un cataclismo podría revertirla o acortarla significativamente en su totalidad, pese a la presencia de factores presumiblemente favorables a la oposición. Por lo tanto, la verdadera contienda política ocurre municipio a municipio, donde el PRD está en condiciones de preservar sus victorias y conseguir otras.

En algunas localidades, en efecto, la diferencia entre los dos partidos fue mínima: ese es el caso de Ajuchitlán del Progreso, donde el PRI ganó con 4,367 frente a los 4,240 del perredismo; en Cutzamala de Pinzón, donde el primero llegó a 2,724 y el segundo a 2,673: o La Unión, donde hubo 3,094 votos priístas y 3,061 para el PRD.

Un razonamiento semejante, sin embargo, puede hacerse en sentido contrario, pues los ayuntamientos ganados por el cardenismo resultaron de victorias muy apretadas: en Alcozauca de Guerrero, un municipio rojo desde hace mucho tiempo, el PRD ganó 1724 votos contra 1,703 del PRI; en el pueblo natal del doctor Ignacio Chávez, Zirándaro, el PRD obtuvo 3,212 contra 3,123 del PRI, y en Malinaltepec, donde la diferencia en favor del perredismo fue apenas de 59 votos: 2,169 contra 2,110.

Esos resultados muestran la importancia de los

candidatos, y de un clima de tranquilidad que permita la expresión de los ciudadanos. Eso es especialmente cierto y necesario en un lugar como Acapulco, donde se concentra una cuarta parte de los votantes del estado y cuya proyección internacional le otorga un carácter particular. Los dos principales partidos enfrentaron dificultades para la determinación de sus candidatos, y finalmente quedaron postulados Juan Salgado Tenorio del PRI y Zeferino Torreblanca, por el PRD.

El primero condensa el perfil típico del militante priísta, que a lo largo de 18 años ha ocupado una diversidad de puestos locales. A últimas fechas era el secretario del ayuntamiento que ahora aspira a encabezar; pero al ser nombrado gobernador Aguirre, se fue a Chilpancingo a la subsecretaría de finanzas. El segundo proviene de la iniciativa privada, caso que ya no es insólito en el perredismo. Dirigente de la Cámara Nacional de Comercio y del Centro Patronal (afiliado a la Coparmex) en el puerto, Torreblanca es diputado federal por el PRD. Su lanzamiento a la alcaldía provocó problemas internos, pero cumple el perfil de “buenos candidatos, aunque no sean miembros del partido” definido por el dirigente nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador. El aspirante perredista contará en su favor con la imagen que ha ganado al denunciar actos de corrupción del actual presidente municipal, Rogelio de la O.

En el marco institucional se perciben avances que sin embargo no es debido sobrevalorar. La ley electoral fue

modificada y se abandonó el absurdo mecanismo que dejaba en manos directamente de la legislatura local la organización de los comicios. Esa tarea fue ahora realizada por un consejo estatal electoral compuesto por ciudadanos que, sin embargo, entraron tarde en el proceso y no pudieron tomar en sus manos, enteramente, la conducción del mismo. Consiguieron, no obstante, la firma de un acuerdo por el cual el gobernador Aguirre quedó sujeto a no vincular acciones de gobierno con la campaña electoral de su partido, pues como se sabe ese aspecto de la inequidad electoral no ha podido ser todavía removido. La oposición, especialmente el PRD ha formulado denuncias políticas de que tal conducta no se modificó pese a esa determinación de la autoridad electoral, y teme que sus efectos inhiban la voluntad de los ciudadanos, o la tuerzan.

No hay duda, sin embargo, de que el principal factor deformante del proceso electoral, aunque no haya repercutido directamente sobre él, reside en la irrupción del Ejército Popular Revolucionario y el acrecentamiento de la presencia y la movilización militares en el estado, que en el último cuarto de siglo no ha dejado de ser vigilado preferentemente por el Ejército. El EPR anunció su abstención de acciones armadas durante el último tramo de las campañas electorales, y ha cumplido la oferta, pero eso no basta para eliminar los efectos de su actividad, que puede provocar voto de temor, o reforzar al menos las tendencias inerciales que favorecen al PRI.

De un modo más directo, el despliegue de fuerzas

militares, y la persecución judicial contra dirigentes sociales, ha incidido en los comicios de hoy. Hasta 18 dirigentes de agrupaciones sociales han sido encarcelados bajo la acusación de pertenecer al EPR, en lo que ha resultado una operación de doble efecto. Por un lado, se busca descabezar a agrupaciones no sujetas al control gubernamental. De hecho, los graves episodios que en el último año y medio han agravado a Guerrero, conciernen a esa pretensión de las autoridades, de inhibir y limitar la actuación de grupos como la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Uno de sus líderes, Hilario Mesino, estaba ya preso en Acapulco cuando la represión arreció, y han seguido su suerte otros dirigentes, que en política electoral se han movido en torno del PRD. De allí que sus capturas afecten las capacidades de ese partido frente al acto electoral de hoy, y sobre todo constituyan un mensaje intimidante frente al resto de la población.

La gravedad de este amago no se limita sólo a sus efectos sobre los resultados de hoy, sino a las posibilidades de la democracia frente a la violencia. Si se prefiere inyectar en el ánimo de los guerrerenses una indisposición frente a las urnas, no hay duda de que muchos de ellos trocarán los votos por las balas, como ya lo han hecho los miembros del Ejército Popular Revolucionario.

Por eso no se entendió, o comprendiéndola fue preciso calificarla de torpe, la actitud del gobierno de la República de oponerse a un acto que reforzaría la opción política, civilista y de negociación asumida por el Ejército Zapatista

de Liberación Nacional. Porque, en último término, ese sería el efecto de la asistencia de una delegación zapatista al Congreso Nacional Indígena y a otras reuniones de grupos e instancias que han favorecido su conversión de ejército armado, en parte de un frente político.

Es preciso considerar que hasta este momento la presencia del zapatismo armado en la ciudad de México se plantea como una invitación de grupos civiles al EZLN, pero éste no ha ofrecido aún una respuesta, de tal suerte que mal se puede atribuirle intenciones de provocar. Los invitantes, especialmente los organizadores de la reunión india, saben que es indispensable la presencia zapatista, no sólo porque sus bases la constituyen comunidades tzeltales, tzotziles y de otras etnias que deben estar representadas, sino porque al EZLN se debe el estado actual de la conciencia pública sobre los indios. Adicionalmente, puesto que el Ejército Zapatista ha sido anfitrión de grupos indios y otros interesados en su suerte, en las reuniones que dieron origen y sentido al Congreso de la próxima semana, parece incontrovertible la práctica de la reciprocidad. Y, por último, aunque este extremo no tenga que ser expresado por estos grupos, es claro que la salida de una delegación zapatista del territorio en que militarmente se les ha confinado, robustece la posición política del zapatismo, necesitado de un relanzamiento luego de su decisión de interrumpir el diálogo de San Andrés.

Ante la sola invitación, el gobierno federal reaccionó con dureza y sin inteligencia. Carece de bases para impedir

que el EZLN se desplace fuera de las cañadas, porque no se trata de una movilización armada que significara la reanudación de las hostilidades. Pero en el caso de que un grupo, una delegación breve, resolviera viajar a la ciudad de México o a donde la plazca, tiene perfecto derecho a hacerlo. Pueden formar parte de ella aun personas contra las que se hubiera dictado orden de aprehensión, pues la sola y mantenida condición para que queden en suspenso, es que el diálogo de paz no se rompa. Y no se ha roto, ni se romperá aun si lo dijeran las partes, pues declarar tal situación corresponde a la Cocopa, la comisión de Concordia y Pacificación del Poder legislativo (en que también participa una representación chiapaneca, composición que denota su carácter nacional, ya que si fuera al revés, hablaríamos de una comisión local con representación de las cámaras federales).

El 3 de octubre, la Cocopa asumió una posición arbitral, que en rigor estricto no era todavía necesaria porque el EZLN no ha manifestado su posición. Pero si se presume que acepta salir de las cañadas, entonces la tercera de la Cocopa será imprescindible, no para violar la ley ni para hacerla valer, puesto que los derechos se ejercen sin permiso para ello, sino en función de resto de los valores que persigue el diálogo al que coadyuva esa comisión.

En esa posición arbitral, la Cocopa dictaminó que “la sociedad no debe verse sacudida por los desplantes de las partes. Ni la amenaza de que se aplicará la ley contra los zapatistas ni actitudes temerarias sólo para demostrar que

éstos no especulan”. Hizo bien, en consecuencia (con la salvedad indicada respecto del zapatismo) , en solicitar “a gobierno federal y al EZLN que regresen al camino de la política y asuman las responsabilidades que cada cual tiene con la paz social”

Muy rápidamente el gobierno reaccionó, aunque lo hizo contradictoriamente o en un doble juego. Mientras que el negociador Marco A. Bernal, como si ignorara el contenido de la ley en función de la cual actúa, virtualmente lanzó un ultimátum a los zapatistas, la Secretaría de Gobernación mostró un talante conciliador. Ya no puso en duda la licitud del viaje, sino sólo su naturaleza, para que resulte de la negociación y no de un acto unilateral. Ayer sábado faltaba conocer la posición del EZLN, cuya delegación puede caminar sobre el asfalto capitalino el próximo martes como resultado de la negociación que acaso hoy esté llevando adelante la Cocopa.